

NUE 144-A-2017

Batres Argumedo contra Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Improponibilidad

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con un minuto del doce de junio de dos mil diecisiete.

El 27 de abril de 2017, **Edenilson Martín Batres Argumedo** presentó recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, el 20 de abril de 2017.

El ciudadano solicitó información consistente en: “el nombre de la persona que elaboró la demanda de Amparo número 151-2017, interpuesta por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presentada en contra de la resolución pronunciada por el Instituto de Acceso a la Información Pública que los obligaba a brindar información sobre la reunión sostenida el veintitrés de julio de dos mil dieciséis en un local de FUSAL, por parte de miembros de esa Corte”.

La Oficial de Información resolvió, según el escrito presentado, no dar trámite a la solicitud interpuesta, debido a que la Sala de lo Constitucional en el auto de admisión hace constar quiénes interpusieron la demanda correspondiente.

En este contexto, se valoró el cumplimiento de los requisitos de proponibilidad del recurso, tomando en consideración los principios de celeridad, economía procesal, control y ordenación del proceso.

I. Derecho de acceso a la información pública (DAIP)

El Art. 2 de la LAIP, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información **exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en**

poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

En ese orden de ideas, de conformidad con el Art. 6 letra “c” de la LAIP, la información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico.

II. Falta de competencia objetiva

El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 37, dispone que la competencia objetiva será determinada por la materia a conocer, es decir, para el presente caso, la materia a conocer es el acceso a la información pública. En este sentido, se puede afirmar que es indispensable que el recurso interpuesto verse sobre acceso a la información pública para que este Instituto sea competente para conocer.

Para ello, se debe aclarar que la principal competencia de este Instituto es velar por la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); en este sentido, es importante señalar que el objeto de la LAIP se reduce a garantizar el Derecho de Acceso de toda persona a la información pública, tal como lo establece el art. 2 de dicho cuerpo normativo.

Por lo tanto, si bien este Instituto es el ente creado por Ley para dirimir controversias entre los entes obligados y la población en general, dichas controversias deben versar sobre temas de acceso a la **información pública** para que se active la competencia objetiva y así conocer de los casos que se presentan en esta instancia.

Por ello, es importante analizar el objeto del recurso interpuesto por el ciudadano **Edenilson Martín Batres Argumedo**, ya que es un presupuesto necesario para que este Instituto conozca el fondo del asunto. En este sentido, la información solicitada consiste en “el nombre de la persona que elaboró la demanda de Amparo número 151-2017, interpuesta por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presentada en contra de la resolución pronunciada por el Instituto de Acceso a la Información Pública que los obligaba a brindar

información sobre la reunión sostenida el veintitrés de julio de dos mil dieciséis en un local de FUSAL, por parte de miembros de esa Corte”.

De lo anterior, surge la necesidad de distinguir entre información administrativa e información jurisdiccional; y, para ello, es oportuno citar lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la Inconstitucionalidad de referencia 7-2006, en el que se define la información jurisdiccional como: “todo dato que constate la existencia o realización de un **acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción**, tales como fases del proceso, **demandas**, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones”.

Aclarado lo anterior, al haber establecido que información pública es toda aquella en poder de los entes obligados contenida en archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico; se evidencia que la información pública tiene su fundamento en la información de carácter administrativo y no jurisdiccional.

En consecuencia, se puede afirmar que la información solicitada está encaminada a tener acceso o conocimiento sobre una parte de un expediente de naturaleza jurisdiccional y no administrativa; y, por lo tanto, este Instituto es evidentemente incompetente en razón del objeto para conocer el fondo del asunto.

Por lo tanto, con base al artículo 102 de la LAIP, 22 y 277 del Código Procesal Civil y Mercantil es oportuno declarar la improponibilidad del presente recurso, debido a que se ha advertido la falta de un presupuesto material, es decir, la naturaleza de la información que se solicita no se protege bajo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dado que al tratarse de información que versa sobre aspectos jurisdiccionales, deberá seguir el trámite que establece las normas procesales correspondientes.

De conformidad con lo antes expuesto y con base en los artículos 6 y 18 de la Constitución de la República, 2, 6, 102 de la LAIP, 22 y 277 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), este Instituto **resuelve:**

a) **Declarar improponible** el recurso de apelación interpuesto por **Edenilson Martín Batres Argumedo**, en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, el 20 de abril de 2017.

b) **Notificar** esta resolución al ciudadano **Edenilson Martín Batres Argumedo**, a través del telefax; dejando constancia impresa de haberse realizado la notificación.

c) **Archivar** definitivamente este expediente una vez esta resolución adquiera estado de firmeza.

-----CHSEGOVIA-----ILEGIBLE-----ILEGIBLE-----ILEGIBLE-----
-----ILEGIBLE-----PRONUNCIADO POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LO
SUSCRIBEN"RUBRICADAS"